



Informe 0502/2009

La consulta plantea la posibilidad de dar acceso al Padrón Municipal de la época de la República (1931-1936) a los historiadores y otros investigadores que así lo solicitan a la Corporación consultante de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD), y a su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.

Este mismo supuesto fue objeto del informe de esta Agencia 442/2007 de fecha 22 de octubre de 2007, por lo que procede dar respuesta en los mismos términos contenidos en él y manifestar:

En primer lugar es preciso señalar que, la consulta de dichos datos supondrá una cesión de datos de carácter personal, definida por el artículo 3 i) de la Ley Orgánica 15/1999, como “toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado.

Con carácter general, la cesión o comunicación de datos de carácter personal viene regulada en el artículo 11.1 de la Ley Orgánica al establecer que “los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado”. El consentimiento deberá ser otorgado con carácter previo a la cesión y suficientemente informado de la finalidad a la que se destinen los datos cuya comunicación se autoriza o el tipo de actividad de aquél a quién se pretende comunicar (artículo 11.3), y que debe recabar el cedente como responsable del fichero que contiene los datos que se pretenden ceder.

La obligación de consentimiento sólo se verá exceptuada en los supuestos enumerados en el artículo 11.2, cuyo apartado a) se refiere al caso en que exista una norma con rango de Ley habilitante de la cesión. Por ello, deberá determinarse si la legislación reguladora de los ficheros a los que la consulta se refiere permite esa transmisión de sus datos.

Considerando que se trata de datos procedentes del Padrón Municipal de Habitantes y siendo el Padrón un fichero de titularidad pública, debe partirse, con carácter general, del principio de delimitación de la finalidad en las cesiones entre Administraciones Públicas consagrado por el artículo 21 de la Ley Orgánica 15/1999, al exigir que si los datos son cedidos a otras Administraciones Públicas sirvan sólo para el ejercicio de competencias iguales

o que versen sobre materias semejantes, con la única excepción, tras la Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, de 30 de noviembre, de que el cambio de finalidad esté fundado en una de las causas contenidas en el artículo 11 de la propia Ley Orgánica, pudiendo ser sustituida la necesidad del consentimiento para el cambio de finalidad por una previsión realizada en una disposición con rango de Ley (art. 11.2 a).

Pues bien, tratándose de documentos públicos u oficiales, como el censo de población, cuando haya concluido el procedimiento administrativo en que se generaron o utilizaron, y habiéndose producido el archivo administrativo de los documentos, pasarán estos, como parte del Patrimonio Documental Español.

Debe señalarse que el artículo 49.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, reguladora del Patrimonio Histórico Español establece que “Forman parte del Patrimonio Documental los documentos de cualquier época generados, conservados o reunidos en el ejercicio de su función por cualquier organismo o entidad de carácter público, por las personas jurídicas en cuyo capital participe mayoritariamente el Estado u otras entidades públicas y por las personas privadas, físicas o jurídicas, gestoras de servicios públicos en lo relacionado con la gestión de dichos servicios”.

A su vez, el artículo 57.1 de la misma norma señala que “La consulta de los documentos constitutivos del Patrimonio documental español a que se refiere el artículo 49.2 se atenderá a las policial, procesal, clínico, o de cualquier otra índole que puedan afectar a la seguridad de las personas, no podrán ser públicamente consultados sin que medie consentimiento expreso de los afectados o hasta que haya transcurrido un plazo de 25 años desde su muerte si su fecha es conocida o, en otro caso, de 50 años a partir de la fecha de los documentos”.

Con carácter general debe señalarse que la aplicación de este artículo implica estar, en primer lugar, a la fecha de fallecimiento del titular de los datos cuando esta sea conocida. Es evidente que tratándose de un Padrón municipal, será posible, en la gran mayoría de los casos, determinar o acceder a la fecha de fallecimiento de las personas empadronadas, por lo que no sería aplicable el criterio subsidiario de que hayan transcurrido 50 años desde la fecha de los documentos para el acceso a los mismos sino en aquellos casos en que sea imposible determinar el fallecimiento. Debe considerarse además, que en cuanto aludamos a datos de 1935, es posible que la persona empadronada viva aún, por lo que en ningún caso podremos hablar de documentos históricos ni, desde luego, que el tratamiento o cesión de sus datos personales se pueda

regir por la Ley de Patrimonio Histórico Español sino por la de Protección de Datos de Carácter Personal.

Debe indicarse, además, que en lo referente al padrón municipal de habitantes, el artículo 16.3 de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local, redactado conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, establece que “los datos del Padrón Municipal se cederán a otras Administraciones Públicas que lo soliciten sin consentimiento previo del afectado solamente cuando les sean necesarios para el ejercicio de sus respectivas competencias, y exclusivamente para asuntos en los que la residencia o el domicilio sean datos relevantes. También pueden servir para elaborar estadísticas oficiales sometidas al secreto estadístico, en los términos previstos en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública y en las leyes de estadística de las comunidades autónomas con competencia en la materia”.

Fuera de estos supuestos, los datos del Padrón son confidenciales y su acceso se rige por la Ley Orgánica 15/1999 y por la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.